

Santiago, veintidós de agosto de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

En estos autos, el entonces Ministro en Visita, señor Vicente Hormazabal Abarzúa, con fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual, en la parte recurrida, condena a Luciano Astete Almendras, en calidad de autor del delito de secuestro calificado, en grado consumado y reiterado, de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, cometido a partir del 12 o 13 de septiembre de 1973, a la pena efectiva de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias legales correspondientes y al pago de las costas de la causa.

Impugnada esa decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de La Serena, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar el fallo, con declaración que, en el aspecto penal, se aumenta la sanción corporal impuesta a diecisiete años y seis meses de presidio mayor en su grado máximo, al igual que el incremento de la indemnización de perjuicios otorgada por el daño moral en favor de los familiares de las víctimas.

Finalmente, en contra de esta última sentencia, se dedujo el recurso de casación que pasa a examinarse, respecto del que se ordenó traer los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando undécimo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

*“1º.- Que el día 12 de septiembre de 1973 en la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, por orden del Prefecto de Carabineros de la Prefectura de*



*Tocopilla, Luciano Astete Almendras, del Mayor Ramón Arístides Otero Herrera (fallecido), Comisario de la Comisaría de Carabineros de María Elena, y del Subcomisario de Pedro de Valdivia, Capitán Gerardo René Maluje Abraham (fallecido), se le ordenó al Teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza (fallecido) de la misma Subcomisaría, que detenga a Jorge Antonio Cerda Albarracín y a Carlos Desiderio Quiroga Rojas. Cumplida la orden, son ingresados a dicha Subcomisaría.*

*2°.- Que el día 13 de septiembre, en horas de la tarde, Cerda Albarracín y Quiroga Rojas, conjuntamente con Mario Nelson Solari Cortés y Gloria Angélica Galaz Álamos, son trasladados a la ciudad de Antofagasta por una patrulla de Carabineros, bajo el mando del Teniente Osvaldo Aniceto Muñoz Sanhueza, y entregados en la Intendencia al Juez Militar, Hugo Joaquín Lagos Osario (fallecido), donde funcionaba, en ese entonces, el Juzgado Militar, llevando además, un informe preparado y firmado por el Prefecto Luciano Astete Almendras, el Comisario Ramón Arístides Otero Herrera y el Subcomisario Gerardo René Maluje Abraham.*

*3°.- Que el día 18 o 19 de septiembre se realiza un supuesto Consejo de Guerra, cuyo único indicio es una copia simple de sentencia, de 19 de septiembre de 1973, que condena a don Jorge Antonio Cerda Albarracín y a don Carlos Desiderio Quiroga Rojas a la pena de muerte como autores de los delitos de los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 17.798 sobre Control de Armas de fuego y los delitos de espionaje y subversión con las Fuerzas Armadas y Carabineros, previstos en los artículos 252 y siguientes del Código de Justicia Militar, firmado por "Honorable Consejo de Guerra".*

*4°.- Que el día 20 de septiembre de 1973, aprueba y ordena el cumplimiento de la sentencia aludida en el numeral precedente, el General de*



*Brigada Hugo Joaquín Lagos Osorio, Jefe de Zona del Estado de Sitio.*

*5°.- Que el 20 de septiembre a las 01:00 horas, fueron ejecutados Jorge Antonio Cerda Albarracín y Carlos Desiderio Quiroga Rojas en cumplimiento de la referida sentencia, en la Cárcel Pública de Antofagasta”.*

**2°)** Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia del tipo penal de secuestro calificado, en carácter de reiterado, en las personas de don Jorge Antonio Cerda Albarracín y don Carlos Desiderio Quiroga Rojas, estableciéndose que, además, dicho ilícito conforma un delito de lesa humanidad, aspectos que se mantuvieron en la revisión ejecutada por el Tribunal de Alzada.

**3°)** Que, en contra del fallo de segunda instancia, se deduce un recurso de casación en el fondo por parte de la defensa del sentenciado Astete Almendras, quien lo hace consistir en las causales de los numerales 1, 2 y 5 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, asegurando que el fallo censurado infringe el artículo 488, en sus numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, al igual que los artículos 15 N° 2, 93 N° 3 y N° 6, y el 148, todas disposiciones del Código Penal.

En su recurso, los capítulos de invalidación los desarrolla a propósito de la norma legal que denuncia infraccionada. Así, a propósito del artículo 488 N°s 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, enfatiza sobre la necesidad de contar con una “multiplicidad” de elementos incriminatorios para arribar a una decisión condenatoria, lo que asegura estar ausente en estos antecedentes pues, según expone, solo existe un único testigo que inculpa a Astete Almendras, quien es el teniente de Carabineros, Osvaldo Muñoz Sanhueza, con lo cual es insuficiente ese único elemento para proceder a la condena impuesta. En tanto, respecto del artículo 15 N° 2 del Código Penal, reitera la misma idea, en el



sentido que faltan elementos suficientes que permitan acreditar de manera fehaciente la participación en calidad de autor inductor, señalando que sólo está acreditado que él llegó a la localidad de Pedro de Valdivia cuando las víctimas ya estaban detenidas. Asimismo, respecto del artículo 148 del Código Penal, entiende que, en este caso, se encuentra calificado de manera errada el delito pues, en su calidad de funcionario público, el sentenciado estaba habilitado para proceder a la detención de las víctimas y por ello debiese ser recalificado el ilícito a una detención ilegal y, desde allí, rebajar la penalidad. De igual forma, estima desacertada la decisión de rechazar las excepciones de amnistía y prescripción de la acción penal, cuyos requisitos de procedencia los considera concurrentes y, pese a ello, son rechazados de manera errada. Finalmente, denuncia la infracción de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que debió ser observado, en particular a su condición de salud y edad – 98 años –. En tal sentido, en base a la aludida Convención, plantea que la prescripción, o bien, la media prescripción, debieron ser acogidas, lo cual ha ocurrido respecto de otras personas sometidas a juicios por delitos similares.

En concreto, propone que se acoja el recurso y, en definitiva, al casar la sentencia recurrida, se revoque la decisión de primera instancia, procediendo a absolver al acusado de la pena impuesta o, en subsidio, y conforme a lo antes expuesto, se recalifique, tanto el delito imputado como su grado de participación, y se le otorgue la media prescripción, con lo cual podrá optar a alguno de los beneficios de la Ley 18.216, tomando, además, en consideración su edad y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

4º) Que, como cuestión inicial, debe considerarse que el recurso



contiene varias deficiencias insoslayables y que se traduce en su inmediato rechazo. En este caso, la defensa plantea causales de invalidación que, más allá de no precisarse la forma en cómo ellas vienen formuladas, de allí que ha de entenderse que las mismas están formuladas de forma conjunta, lo cierto es que ellas encuentran una construcción argumentativa defectuosa y que se contraponen a lo señalado en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, esta última norma – aplicable en la especie –, exige que el recurso de casación precise de manera expresa y determinada el o los preceptos legales que se estiman vulnerados, detallando la forma en cómo el error se ha producido y, por supuesto, la influencia de este yerro en lo dispositivo del fallo.

En tal sentido, al estudio del arbitrio que se formula, la asistencia letrada menciona varias incorrecciones que se desarrollan de forma inadecuada y en las que no se cumplen las exigencias previamente anotadas, evidenciándose, además, elementos y argumentaciones que se contraponen entre sí, pues, el recurrente, al proponer la causal de casación del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, necesariamente debe concordar con la existencia y calificación del delito ya determinado en la instancia y, en realidad, el error lo atribuye a la construcción en torno de la autoría que se le imputa – en este caso asegura la falta de participación – pero, enseguida, de manera ilógica, bajo el motivo de nulidad establecido en el segundo numeral del artículo 546 del citado cuerpo legal, se desatiende de esa calificación con la que inicialmente debía coincidir, atribuyendo una nueva falta en el ejercicio de subsunción, cuestiones que no pueden coexistir de la manera en cómo vienen siendo planteadas, sobre todo si esto último se basa, según se expone, en la facultad para detener y encerrar que detentaba el sentenciado.

**5°)** Que, sobre lo mismo, la tercera causal involucrada, aquella



contemplada en el numeral 5° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, inicia su texto señalando: *“En que, aceptados, como verdaderos los hechos que se declaran probados...”*. Tal asentimiento, conforme a lo expuesto, precisamente se contrapone a los argumentos antes detallados ya que el recurso formulado, en su inicio, se construye en base a la falta de aceptación de los hechos asentados y en los que se busca su alteración. En este capítulo, cabe recordar que la recurrente no disocia ni diferencia los motivos de nulidad planteados, de tal manera que ellos han de estar estrechamente vinculados entre sí.

Ahora, si ello no fuese suficiente, este motivo de nulidad se vincula con el rechazo de la aplicación de la institución de la amnistía y la prescripción de la acción penal, alegaciones que son descartadas en base al establecimiento del carácter de lesa humanidad que se le otorgó al ilícito de autos y cuyo aspecto, más allá de ser mencionado en el recurso, en parte alguna de éste viene siendo cuestionado y, desde allí, vastos han sido los fallos de esta Sala en donde se ha resuelto la incompatibilidad de dichas alegaciones con este carácter, particularmente porque ello importa considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la que excluye la aplicación de tales alegaciones en esta clase de delitos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de normas de *ius cogens* provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, de tal manera que, más allá de los aspectos formales anotados, lo cierto que dichas alegaciones son contrarias a lo expuesto y no existe desacierto por parte de los sentenciadores de instancia al desestimarlas.

**6°)** Que, finalmente, cabe anotar que las alegaciones en torno a la



vulneración de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de manera clara y precisa, no están vinculadas a ninguno de los motivos de nulidad que prevé el ordenamiento de procedimiento penal, bastando esa sola circunstancia para descartar dicha alegación. No obstante, en lo que respecta a sus postulados, sin duda son elementos que serán relevantes en la etapa del cumplimiento de la pena impuesta, de tal manera que la aplicación de dicha normativa ha de ser considerada en la oportunidad procesal correspondiente y que tiene a su cargo el Juez de la instancia.

7º) Que, en las condiciones anotadas, el recurso formulado no podrá prosperar.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se **RESUELVE**:

Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa del sentenciado Luciano Astete Almendras, en contra de la sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

**Regístrese y devuélvanse.**

**Rol N° 1.320-2024**

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma la Ministra Sra. Letelier y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la



causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y con licencia médica, respectivamente.





En Santiago, a veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

